

Los mineros de ayer, los indígenas de hoy. La agenda nacionalista en Bolivia y el dilema de la diferencia	Titulo
Salazar de la Torre, Cecilia - Autor/a;	Autor(es)
Hegemonía cultural y políticas de la diferencia	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO	Editorial/Editor
2013	Fecha
Colección Grupos de Trabajo	Colección
Mineros; Integración política; Fragmentación social; Diferencia cultural; Identidades étnicas; Indígenas; Política indígena; Multiculturalismo; Bolivia;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
*http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20130724114413/Salazar_de_la_Torre.pdf	URL
Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



LOS MINEROS DE AYER, LOS INDÍGENAS DE HOY. LA AGENDA NACIONALISTA EN BOLIVIA Y EL DILEMA DE LA DIFERENCIA

Cecilia Salazar de la Torre*

INTEGRACIÓN POLÍTICA Y ESTADO DE 1952

A partir de la revolución de 1952, el Estado-Nación en Bolivia se redefinió con la masiva incorporación a la ciudadanía de amplios sectores campesino-indígenas, sometidos hasta entonces a relaciones de servidumbre. La revolución cambió, por tanto, el destino del país, condicionado a la amplia mayoría cuantitativa de aquél grupo social y, a su vez, a la impronta relativamente tardía de la modernidad, una de cuyas cualidades fue la predominancia de lo rural sobre lo urbano hasta la última década del siglo XX.

El puntal que le dio cuerpo a la ampliación ciudadana fue la extensión del derecho a la propiedad y a la libertad, diarquía sobre la que se erigió el sujeto emergente, apropiado de sí mismo y atribuido de sentimientos de igualdad. Estos fundamentos, contenidos en la reforma agraria y el voto universal, dieron curso a sus aspiraciones progresistas, que llevaron a los grupos sociales a movilizarse en pos de su integración nacional. La libertad del campesinado-indígena se posó sobre la capacidad de elegir los recursos económicos, políticos y cultu-

* Socióloga boliviana, con estudios de maestría en FLACSO, México. Actualmente Directora del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) de La Paz, Bolivia..

rales que apuntalaran su condición ciudadana, forma de pertenencia abstracta que adquiere sentido cuando las identidades prescindan de sus especificidades y anteponen a ellas otras más generales. Es decir, cuando la colectividad incorpora en su sentido de pertenencia la forma nacional (Zavaleta, 1990). Resultado de consideraciones pragmáticas, este proceso develó, en su faceta cultural y política, la presencia de un nuevo ser boliviano.

Al calor de los derechos adquiridos, el sujeto emergente buscó su lugar en el seno de una sociedad en crisis que se había configurado bajo el dominio oligárquico. Es decir, en un ambiente en el que la bolivianidad, categoría restringida hasta entonces, era puesta en el centro de las disputa políticas para ratificar, a través de ellas, las nuevas correlaciones de fuerza instaladas en el país. Los primeros indicios de descomposición de aquella sociedad se manifestaron en el paso del siglo XIX al XX, cuando emergieron las clases medias, legado de la decadencia de algunos grupos aristocráticos y, a la vez, del ascenso de otros de origen campesino-indígena. Ambos grupos sociales se encontraron en las ciudades, ampliando su espectro burocrático y comercial, especialmente en el eje económico La Paz-Oruro, sin que ello menguara aún la persistencia del patrimonialismo, anclado en la racionalidad aristocrática de la hacienda y el distanciamiento cultural entre las clases sociales. A partir de los años 30, ambos grupos fueron protagonistas, a su vez, del fragor nacionalista, que encontró sentido en la guerra contra Paraguay (1932-1935), de la que Bolivia salió vencida. La derrota fue atribuida, por un lado, a la incapacidad de la oligarquía para conducir el destino de Bolivia y, por otro, a los intereses que puso en el conflicto bélico la empresa petrolera Standard Oil Company. Después de su fracaso en el conflicto, el país vivió, por más de 15 años, una intensa confrontación social y política, que culminó con la revolución de 1952. En ese escenario se ratificó, por una parte, a la clase media como intérprete de los dilemas nacionales, bajo el paradigma dominante de la nación confrontada a la anti-nación. Por otra, al mundo campesino-indígena como protagonista de un nuevo orden social cuya especificidad hay que referirla a una economía carente de fuerza y capacidad integradora. Por ende, ausente de la condición básica e ineludible que reclama todo Estado-nación (Torres Rivas, 1997).

Fue en ese escenario que la revolución de 1952 inició su rumbo. Una primera derivación de estos aspectos fue la preeminencia de la política como factor de cohesión nacional. Dada la fragmentación social, económica y cultural sobre la que se erigió el nuevo orden social, Estado y sociedad iniciaron un ciclo de interacción que prevalece hasta hoy, a través organizaciones sindicales que agregan en su seno intereses privados, sin alcanzar horizontes más generales, a no ser cuando el gra-

do de crisis estructural induce a una concurrencia de fuerzas tal que, en su forma más amplia, pero coyuntural, produce la disputa política por el poder. No es casual que en su forma más extendida, el horizonte político de una sociedad como esta esté arraigado en planteamientos nacionalistas y estatistas, con los que se espera alcanzar la integración social, económica y cultural, contando para ello con una fuente de redistribución desde arriba y con lógicas corporativas con las que se intenta restaurar la relación Estado/sociedad.

En el mundo rural, las mediaciones aludidas tomaron la forma de los sindicatos campesino-indígenas, organizaciones que desde la reforma agraria de 1953 hasta ahora agregan los intereses de los pequeños propietarios. Sin embargo, lo hicieron bajo la forma del aparato para-estatal y de lo que desde entonces se conoce como servidumbre política, prolongando las formas de intermediación propias del Estado feudal que rigieron la época precedente. El cacique, dirigente o funcionario local pueblerino fue el que le dio sentido a esa continuidad, sometiendo al mundo campesino-indígena a nuevas formas de exacción y manipulación, a nombre del proceso revolucionario y de su presencia en el mismo como símbolo nacionalista, reintegrado a la colectividad y su destino.

Al convertirse en una cuestión estrictamente política, la revolución se descompuso tempranamente. Un rasgo a destacar se situó en las disputas entre caudillos del partido de gobierno, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el otro en la relación que la revolución forjó con los trabajadores de las minas. En el primer caso, los conflictos interpersonales entre caudillos arrastraron a grupos de campesino-indígenas que, en función de sus lealtades parceladas, se vieron cruentamente confrontados entre sí. De cierta manera la fragmentación inter-comunitaria quedó acentuada, pues, por la forma que adquirió la revolución, atrapada en medio de fracturas, pero también de la imposibilidad de transformar el aparato productivo del país y crear las bases materiales de la igualdad democrática. Con ese sello y dada la preeminencia de intereses corporativos, la lucha política se validó según la legitimidad que los contrincantes decían encontrar en la masa, indistinta, coyuntural. Bajo su sino, estaba claro que toda minoría llevara el estigma de la anti-patria.

Ahora bien, los trazos hasta aquí señalados para comprender al Estado de 1952 serían insuficientes si no se hace referencia al rol que jugaron los trabajadores mineros en el mismo. Dicho esto, el otro pilar del proceso revolucionario se situó en la economía del estaño que a principios del siglo XX permitió a Bolivia reintegrarse a la economía mundial, después del largo aislamiento post independentista y debido a la pérdida de su litoral marítimo en la Guerra del Pacífico con Chile,

en 1879. Su reinserción económica fue favorecida, sin duda, por su capacidad para proveer un recurso de importancia cardinal para la modernización de la industria mundial, cuyo eje tendía a desplazarse hacia Estados Unidos. En ese contexto, el otro epicentro político del país fue ocupado por los trabajadores mineros, de cuya actividad comenzaba a depender la economía nacional. La revolución de 1952 los encontró, pues, como referentes del nuevo orden social que económicamente intentó asentarse en la nacionalización de los recursos mineros, fuente de las políticas redistributivas antes señaladas y a nombre de la soberanía del país respecto a los intereses extranjeros.

Por esa confluencia de factores, la revolución de 1952 fue, sin duda, el momento constitutivo por excelencia del Estado-Nación en Bolivia, planteándose, como nunca, disputas que le son inherentes a la modernidad, aunque en este caso obnubilada por el escaso desarrollo de las fuerzas clasistas que caracterizan a este país.

Dos asuntos hay que mencionar aquí. El primero, asociado a la relación entre propiedad y libertad señalada anteriormente, base de la extensión de la ciudadanía en Bolivia hacia los grupos campesino-indígenas. El otro, asociado a la imposibilidad de que la revolución les garantizara a éstos, además de la integración política, la integración económica. En ese sentido, la revolución convirtió al campesino-indígena en un sujeto moderno, con anhelos igualitaristas, por lo tanto motivado por el ascenso social; pero al mismo tiempo, escatimó sus posibilidades para que todo ello se materializara con cierto grado de homogeneidad, más allá de los beneficios políticos que recibieron coyunturalmente sus líderes, afiliados al poder para-estatal. Podría decirse, en ese marco, que la revolución de 1952 abrió el horizonte democrático liberal que le es afín al pequeño propietario. Pero que, consecuente con ello, lo dejó a expensas de un mercado interno que, por su escaso desarrollo, estaba permanentemente sobre abastecido, asentando el intercambio desigual y empobrecedor entre la ciudad y el campo.

Dicho en breve, el sujeto que emergió con la revolución se configuró a partir de la libertad y la propiedad, pero también a partir de la frustración de sus anhelos de integración y ascenso social. Alentado por ello y ante la carencia de una dirección autónoma, que se distinguiera del aparato nacionalista, el campesinado indígena optó por legitimar la restauración conservadora que siguió a la revolución de 1952. El mensaje que debe leerse en esta elección es que, dadas las condiciones de reproducción en la que se debaten los pequeños propietarios en Bolivia, es lógico que se imponga en ellos una racionalidad pragmática, basada en el interés individual para lograr el objetivo de la integración social, económica y cultural, *a cualquier precio*. El liderazgo para-estatal del campesinado indígena jugó un papel crucial en esa transición, despla-

zando sus vínculos hacia las fuerzas armadas y enrumbando, con ello, el Pacto Militar-Campesino.¹

Con base en la tesis de René Zavaleta sobre los “esquemas rezagados de clases” (Zavaleta, 1988: 53-55; 1990: 45), el autoritarismo militar en Bolivia fue resultado de la debilidad de la clase dominante para generalizar su liderazgo en la organización económica, política y cultural en el país. En el contexto de la democratización política que trajo la revolución de 1952, esta debilidad abrió un amplio escenario para el ascenso de las clases oprimidas que se organizaron explotando las condiciones de convulsión general al punto de causar zozobra entre las clases dominantes. Por eso, el autoritarismo militar tuvo lugar cuando la representación de la nación -vía alianza de clases- ya no cabía en el partido de gobierno y hubo de desplazarla hacia la institución “depositaria” de la soberanía, las fuerzas armadas, supuestamente ubicadas por encima de los intereses particulares y de los conflictos de los grupos políticos en pugna (Mayorga en: Soto, 1994). Con el uso de instrumentos represivos, personificados en la fuerza militar y policial, fue así que se le devolvió “certidumbre” a la dominación, aspecto del que, dice Zavaleta, son positivamente receptivas no sólo las clases medias, sino también los sectores “atrasados” de la clase dominada (Zavaleta, 1990: 1-17).

En aras de su credibilidad, el autoritarismo militar tomó la forma del Pacto Militar-Campesino, en un escenario en el que, a partir de su integración política, la fuerza cuantitativa del campesinado llegó a convertirse en el referente central de la mayoría nacional (Antezana, 1983).² El efecto de esta conjugación era claro: la institución militar tutelaba la soberanía estatal-nacional que simbólicamente estaba encarnada en el campesinado indígena, convertido en clase política, como “espíritu del pueblo”. Veamos cómo operó esta alianza en relación a los trabajadores mineros.

La reinserción de Bolivia a la economía mundial a principios del siglo XX se produjo de manera paralela al trasladarse el motor económico del país hacia el eje La Paz-Cochabamba.³ La mayor cercanía de

1 El “Pacto Militar-Campesino” construyó un aparato de mediación encarnado en connotados caciques campesinos del valle alto de Cochabamba, de donde también era originario el general René Barrientos Ortuño, militar que, en su condición de Vicepresidente de Víctor Paz Estensoro, propició el golpe de Estado en noviembre de 1964, cuando se dio inicio a la denominada “restauración conservadora”.

2 Estaríamos frente a un actor social que se tornó relevante más por su papel político que por su ubicación de clase (Fleury, 1997).

3 Eje al que después de 1952 se asoció Santa Cruz, respaldado con políticas de expansión de la agroindustria que promovió el MNR.

la primera con los puertos del Pacífico, vía por la que transitan desde entonces los minerales bolivianos, fue el imperativo más importante de ese proceso. En ese contexto, los campesino-indígenas más próximos a las fuentes de consumo interno intentaron promover su integración económica, social y política, confrontando permanentes disputas por la propiedad de la tierra que sostuvieron con los hacendados y al amparo de los primeros sindicatos agrarios que surgieron en los años 30. Sin embargo, ese también fue el escenario en el que surgieron las primeras organizaciones de trabajadores mineros, expresión de una clase social que, por su carácter extractivo, no correspondía en sentido estricto al carácter que en el mundo del trabajo tomaron las identidades modernas (Rodríguez, 1987). Al respecto, una cualidad a considerar fue su arraigo campesino, condición que proporcionó a estos trabajadores cierta disposición nacionalista, combinada a una férrea voluntad para el sacrificio político.

La revolución de 1952 encontró en estos aspectos un nuevo soporte ideológico, para confrontar, otra vez, la tensión nación-anti/nación, pero bajo el movimiento pendular politización/despolitización que le es propio al nacionalismo. Así, durante el primer ciclo de la revolución, la tesis “tierras para el indio” fue complementada con la tesis “minas para el Estado”, con la diferencia sustancial de que en el caso del campesinado-indígena más integrado al mercado se estaba dando pie al potenciamiento de un sujeto proto-burgués, individualista y pragmático, mientras que en el caso de los trabajadores mineros se partía del principio de asociación entre interés de clase e interés del Estado. Al desatarse las fuerzas sociológicas que competen a la reforma agraria, los unos avanzaron irreversiblemente en ese propósito. Los otros, en cambio, morirían en el intento reformador de la economía y la política, ejercido desde arriba.

En efecto, el ánimo nacionalista de los trabajadores mineros, que también fue conducido por fuerzas para-estatales instaladas en el liderazgo de sus organizaciones sindicales, se quebró rápidamente debido al fracaso del modelo estatista y ante la parálisis del aparato productivo especialmente minero, conducido por cuadros burocráticos beneficiarios del poder político. Fue en ese lapso que los trabajadores de las minas intentaron forjar una dirección que, bajos los principios de la independencia de clase, se desprendió de los postulados nacionalistas y alentó, por esa vía, su crítica al régimen imperante, especialmente concerniente a su modelo productivo de cuyo estancamiento ellos fueron sus primeras víctimas. Las estratégicas minas de Catavi y Siglo XX fueron el punto de esta ebullición y, pronto, los lugares donde el Pacto Militar Campesino ejerció, con todo rigor, su política disciplinaria. Primero fue el asedio contra los centros laborales en huelga, luego los asesinatos

de los dirigentes mineros, finalmente, la masacre colectiva. Todo esto mientras al amparo de la guerra fría el nacionalismo se desplazaba hacia el anti-comunismo, para preservar -de la supuesta influencia foránea- los valores de una bolivianidad nuevamente reinterpretada.

En medio de disputas entre nacionalismos populares y anti-populares, el ciclo militar autoritario se prolongó hasta principios de los años 80. Entre otras cuestiones, su colapso debe ser atribuido a la emergencia, en los años 70, de un nuevo liderazgo campesino-indígena que, liberado de toda forma de tutelaje, ya estaba en condiciones para catapultar a los pequeños propietarios a la representación general. La materia sociológica desatada por las reformas de 1952 comenzó a tomar cuerpo en esa dirección.

NUEVAS MAYORÍAS MESTIZAS

A principios del siglo XXI los registros censales dieron cuenta de la irreversible urbanización de la población boliviana. Según estos, las ciudades contenían a una proporción cercana al 65% de la misma. Sin embargo, una paradoja quedó asociada a este proceso: a la par de ello, en el censo del año 2001 los bolivianos se refirieron a sí mismos como mayoritariamente indígenas, dato crucial para el modelo interpretativo que se impuso en el país después de la derrota definitiva del movimiento minero en Bolivia, cuando se produjo la crisis estructural del Estado de 1952 y, luego, la emergencia del neoliberalismo. Vayamos por partes.

El esquema económico y político del Estado de 1952, asentado en el modelo extractivo de la minería nacionalizada y, en consecuencia, en la centralidad política del proletariado minero, se vino abajo con la crisis de los precios de los minerales a principios de los años 80. Su último acto económico y político –el del Estado de 1952- fue la expulsión de 35.000 trabajadores mineros de sus centros laborales y, con ello, la eliminación de la más importante forma de mediación entre Estado y sociedad que se había producido en tres décadas, encarnada en la Central Obrera Boliviana (COB). En breve tiempo, esta derrota trajo consigo una profunda ausencia de referentes colectivos en la población boliviana, que había forjado sus imaginarios históricos alrededor del proletariado minero y sus luchas. Fue en ese escenario de vaciamiento político que se encumbró el modelo neoliberal en Bolivia, enraizado en los argumentos individualistas que las ciencias sociales más influyentes de la academia global habían dejado en suspenso, al imponerse el esquema de la solidaridad pública, vía Estado del Bienestar.

El advenimiento del neoliberalismo fue correlato, pues, de la crisis de la sociedad forjada al amparo de ese esquema. Fue acompañado, por tanto, de cuestionamientos a las grandes narrativas y sus pretensiones universalistas, al centralismo estatal y a la economía política y sus

categorizaciones clasistas. Se fundó, en cambio, en el individualismo radical y la presencia del sujeto como agente cultural, liberado de todas las ataduras que condicionaran sus elecciones, entre las que el derecho a ser diferente fue la más sustantiva. En las sociedades del norte y más ricas, la ciudad cosmopolita fue el lugar en el que estos paradigmas encontraron cabida, bajo el supuesto de que la libertad de elección individual exige condiciones materiales previas para realizarse. Su visibilidad fue posible, diría Zavaleta, porque el mundo ya estaba plenamente unificado (Zavaleta, 1990).

Haciendo alusión a sociedades de menor repunte capitalista, Eric Hobsbawm señala que el resultado de esta crisis global de finales del siglo XX fue, en cambio, el repliegue de las identidades hacia pertenencias étnicas, con las que se llenaron los “contenedores del nacionalismo” (Hobsbawm, 2002: 176). Michel Wieviorka coincide al decir que en estos casos esta crisis atrajo procesos de fragmentación social y cultural que condujeron, en algunas sociedades europeas, a la toma de actitudes basadas en la pertenencia natural, alentando la re-emergencia nazista contra los inmigrantes (Wieviorka, 2002). Ambos concuerdan en afirmar que en el contexto de la crisis del Estado del Bienestar, las disputas que emergieron en la sociedad para que los grupos se integraran por vía del trabajo asalariado, cada vez más acotado, tomó la forma de disputas des-modernas, es decir, formas de legitimación en los que, en contextos de incertidumbre colectiva, la condición étnica es la última garantía de pertenencia, porque se nace con ella (Hobsbawm, 2002: 183). Al negar lo que la sociedad tiene en común, la reclusión en esos apartados se volvió disociadora, derivando en correlatos esencialistas y a-históricos, asociados a la invariabilidad de la lengua y la raza y la posesión del espacio o territorio como hábitat natural.

Para René Zavaleta, esta es una cuestión histórica que también le es inherente al país, en el que la sociedad agraria en descomposición no logró trascender hacia la sociedad industrial, creándose, en el limbo, lo que él nombra como “vacancia ideológica” o “vacío en la representación del mundo” (Zavaleta, 1988: 25). Atribuible al limitado desarrollo de las fuerzas productivas, aquí no fue posible, pues, que se produzca la unificación cultural de la nación, por lo tanto que en vez de tener sentido la totalidad, prevalezcan en ella formas fracturadas de auto-conocimiento. Ese es el fundamento, diría Lechner, para que en el seno de estas sociedades, como la boliviana, las visiones laicas del derecho convivan con “legitimaciones trascendentes” (Lechner, en Fleury, 1997) o, como señalaría el propio Zavaleta, que los grupos sociales discutan como raza “lo que en realidad piensan como clase” (Idem).

Reunidas estas apreciaciones, parece tener sentido que en la sociedad boliviana haya una permanente disponibilidad para que

los grupos sociales expongan sus conflictos bajo formas étnico culturales. O, por otra parte, que su arraigo a la sociedad agraria sea conceptuado como una base sobre la cual edificar una alternativa al capitalismo, cualidad emulada por las ciencias sociales contemporáneas que, al reinterpretarse en contextos como éste, dieron lugar al elogio de la diversidad... pero de aquella que es pre-existente a la nación, es decir, la que le es propia a estructuras en las que los grupos sub-nacionales se diferencian entre sí porque el país no cuenta con las fuerzas productivas suficientes para que se produzcan intercambios materiales e inmateriales entre ellos. En el campo de la economía, eso está dado por la presencia de un reducido mercado interno al que se adapta la falta de ambición de los emprendimientos privados. En la cultura, a procesos tardíos de mestizaje, por lo tanto, a la vigencia de recursos identitarios particulares que la política tiende a trasladar a tratos diferenciales entre los ciudadanos, apelando a los mitos interpelatorios del pre-capitalismo (Zavaleta, 1990). En el derecho, a la disponibilidad arbitraria de la ley, en manos de comunidades campesino-indígenas o barriadas urbanas y también de grupos de poder que ejercen su autoridad como si el tiempo de la feudalidad no hubiera pasado aún.

Ahora bien, a estas alturas, parecería que esas condiciones son suficientes para que en Bolivia se alienten fracturas internas como las que a fines del siglo XX se produjeron en Yugoslavia. Pero no fue así. La unificación religiosa del país, fundada en los 500 años de catolicismo que se imprimió en la conciencia colectiva, incluyendo a campesino-indígenas, fue sin duda un factor coadyuvante para contener los grados de diferenciación social y cultural en este país. Tan importante como aquél, el otro factor fue la distribución de la tierra en 1953 y la emergencia, a partir de ello, de una clase política que, sobre la base de la diarquía propiedad y libertad, aspira a convertirse en representante de los intereses generales de la nación, imponiendo su protagonismo como intermediaria del mercado interno y externo en todo el territorio del país. Su pretensión implícita es, por lo tanto, la unificación de la sociedad y su regularidad ordenada, como lo ha sido de todas las burguesías en el mundo. Volvamos a la sociología para aproximarnos a este proceso y su especificidad boliviana.

Varios autores caracterizan a las burguesías por el sentido positivo que le imprimen a sus quehaceres. Esta cualidad ha sido atribuida al efecto de la libertad en la sociedad moderna que, en el caso de esta clase social, se asoció además a la monopolización de la propiedad. Ambos factores soportan la apropiación del sí mismo y el crecimiento económico y cognitivo constantes, cuya función es la mejora continua de los sistemas de acumulación.

En Bolivia las bases de este proceso se configuraron recientemente, con la revolución de 1952. El voto universal y la reforma agraria fueron sus soportes, inscribiendo en los nuevos ciudadanos una obstinación férrea por el logro de la igualdad ciudadana que, en términos políticos y culturales, retrata una condición hacia la que convergen los diferentes grupos identitarios, obligados a desprenderse de sus especificidades para que el Estado no establezca ninguna forma de distinción entre ellos, es decir, no los diferencie ante su autoridad que, jurídicamente, tiene la cualidad de representar los intereses de todos. Dicho esto, la ciudadanía tiene como esencia la indiferenciación entre los sujetos, aspecto que en términos culturales se expresa en la condición nacional del sujeto moderno. En Bolivia, en el boliviano o mestizo.

Rossana Barragán trató estas cuestiones contextualizándolas en la emergencia de la “Tercera República”, resultado de los procesos de movilidad y ascenso social de los sujetos que se zafaron de las exacciones tributarias que el Estado colonial y republicano ejercía sobre ellos, por ser indios. Para hacerlo, activaron una serie de mecanismos individuales para mimetizarse como hombres o mujeres libres, poniendo en resguardo todo símbolo que identificara su particularidad étnica y cultural, fácticamente asociada a la condición de siervos. Un primer recurso fue la migración hacia las ciudades, nutriendo la capa de artesanos, empleados domésticos o comerciantes. El segundo recurso fue la transformación de su vestimenta, adoptando para sí los emblemas de la sociedad criolla. Finalmente, hicieron suyos los hábitos culturales de la sociedad colonial, aún estando pretendidamente limitados a las elites (Barragán, 1992).⁴ Así, a pesar de sus predeterminaciones, la sociedad colonial fue testigo, tempranamente, de la acción de los sujetos y de su voluntad para movilizarse en sus hendiduras y liberarse.⁵

Estas estrategias fueron constantes en la sociedad colonial y republicana. Junto a ella, la reivindicación del derecho a la tierra, por vías legales o violentas fue su otro componente, en este último caso acentuado en los años 30 del siglo XX, especialmente en la zona del valle alto de Cochabamba donde surgieron los primeros sindicatos campesinos, en manos de parceleros que, desde el siglo XVIII, habían accedido a la propiedad de pequeños minifundios, posibilitando su temprano control sobre redes mercantiles (Dandler, 1969; Larson, 1982)

Señalado esto, podría decirse que las reformas que trajo el Estado de 1952 sólo le dieron un rostro político a lo que socialmente ya se había generado desde siglos atrás, apartando a las elites en decadencia

4 Con seguridad, la derrota del movimiento indígena liderado por Tupak Katari en el siglo XVIII fue un hito en el curso que tomó esta estrategia.

5 En sentido inverso, los criollos que buscaban acceder a la tierra se casaban con indias.

del camino que tomaron las fuerzas históricas en el país. Alentado por la potencia de estas razones, el campesinado indígena ratificó, esta vez masivamente, su voluntad por la integración social y la acumulación. Detrás de todo ello, afloró con nuevas energías la disponibilidad del sujeto y su capacidad para actuar y tomar iniciativas, es decir, para elegir los medios que fueran necesarios para alcanzar el status del sujeto moderno. Por eso, cuando en Bolivia se hacen balances demográficos, un hito sustantivo está localizado, nuevamente, en los procesos de urbanización extensiva e irreversible que se desataron desde 1952. Junto a ello, la castellanización del campesinado indígena creció inexorablemente, del mismo modo como lo hizo su acceso a la educación primaria, secundaria y, luego, universitaria, soportes, todos ellos, de la intelectualización de una parte del mundo indígena y, por ende, de su separación progresiva del trabajo agrario.

Sin embargo, este proceso no fue uniforme. De hecho, invocó a quienes estaban mejor colocados como proveedores del mercado de consumo urbano, instalado en el eje La Paz-Cochabamba, es decir, en la franja andino occidental del país donde han convivido históricamente aymaras y quechuas (es decir, kollas) que además son las culturas más extendidas en el país. No es casual que fuera ahí donde se arraigara el sindicalismo campesino sobre el que se erigió la reforma agraria y la legitimidad del MNR y, como veremos luego, las bases sociales del Movimiento al Socialismo (MAS) a principios del siglo XXI. El resto de la población campesino-indígena quedó condicionada al aislamiento o a su incorporación eventual al precario sistema productivo del país y según los ciclos de alza o baja de la economía.

Sobre esa base, las condiciones históricas para la segmentación social y económica del campesinado-indígena estaban dadas. Dos aspectos son ineludibles de mencionar, afines a la emergencia de la “Tercera República”: uno, la conversión de una de sus partes en una poderosa clase comercial urbana, atribuida de rasgos aristocráticos y excluyentes, utilitarista y pragmática. En sus manos están las redes de intercambio mercantil más sustanciosos, legales e ilegales, a través de las cuales, en aras de las equivalencias que se crean en los mismos, han nutrido su identidad mestiza y su poder económico, a ostentarse, entre otros, en el despliegue barroco de la fiesta patronal del “Señor del Gran Poder” (Salazar, 2009); dos, la presencia de una intelectualidad aymara, forjada en la universidad pública de la ciudad de La Paz, donde se originó la ideología katarista, reclamada como la expresión más auténtica del mundo indígena, sin distinciones rural/urbanas y sustento, en breve, de las innovaciones constitucionales que se dieron en el país desde 1994, cuando Bolivia asumió su carácter multiétnico y multicultural y, luego, plurinacional. Fiesta

e intelectualización, adquirieron visibilidad en los años 70, encajando ambas en un sustrato común: ninguna sería posible sin la generación de excedentes derivados a actividades no-productivas. Vamos a detenernos en la intelectualización katarista, para asociarla con el curso que tomaron las ideologías globales post-Estado del Bienestar y, posteriormente, con la expansión política o nacionalización de la cultura kolla, hoy.

Según Gellner (1989), el nacionalismo no es un factor previo al “Estado-nación” sino su corolario. Eso quiere decir, que está antecedido por las transformaciones que se producen en la sociedad moderna, una de las cuales está situada en el proceso de movilidad social que se activa por los sentimientos igualitarios que se imponen con la ampliación de la ciudadanía. En consecuencia, el nacionalismo es resultado no sólo de la incorporación de valores estandarizados en la sociedad sino también de la idea de que todos quienes forman parte de la misma son iguales y, por lo tanto, son sujetos del reconocimiento indiferenciado como ciudadanos. En esa dirección, el nacionalismo es, paradójicamente, inherente al individualismo, aspecto que se suma al resto de las transformaciones profundas e inevitables entre gobierno y cultura, en este caso, afines al Estado nacional. Planteado así, el nacionalismo da cuenta, en el fondo, del grado de homogeneidad alcanzado en lo social (Gellner, 1989: 53).

Ahora bien, en Bolivia, cuando el campesinado-indígena se apropió de sí mismo, puso en marcha su capacidad de elegir los medios que le permitirían alcanzar la igualdad ciudadana y lograr las bases del ascenso social. Su presencia implicaba, de facto, la necesidad de que el país ampliara su capacidad para producir riqueza y distribuirla de acuerdo a la ampliación creciente y sucesiva de ciudadanos. Pero no fue así. La parálisis del aparato productivo no lo admitió. Bajo ese esquema, en el que reina la escasez, la ciudadanización, como ya se señaló, se cobijó en la militancia política a partir de la cual se redistribuyen los recursos políticos, socioeconómicos y culturales; pero también en la diferenciación de los ciudadanos, atribuyéndose desventajas naturales a unos y otros y deslegitimándolos como sujetos con derechos para acceder a los mismos.

El katarismo se situó como un problematizador de esta forma de redistribuir los medios de integración. Por lo tanto, puso en evidencia la discriminación y su incompatibilidad con los enunciados de la democracia y la igualdad. Sin embargo, lo hizo replegándose paulatinamente hacia posicionamientos étnicos, haciéndose eco de los cuestionamientos al colonialismo interno y, por ende, de la idea de que en el país los indígenas son tratados como extranjeros, sin serlo, por otros que sí lo son y se adueñan ilegítimamente de su representación.

Mientras esto ocurría, el Estado de 1952 entraba a su debacle y, con él, los fallidos intentos de recomponer las relaciones sociales en el país a través de la estatización del aparato productivo y las mediaciones sindicales. Ante ello, las fuerzas modernizadoras del neoliberalismo se posicionaron para viabilizar la idea de que el individuo es el mejor promotor de su bienestar y que los medios para lograrlo estaban en su capital cultural.

Planteado así, asistíamos al escenario más disociador que probablemente ha enfrentado la sociedad boliviana, habida cuenta la fractura doble que se encumbró sobre ella: de un lado, bajo el aliento excluyente de la competencia individualista a la que condujo el mercado neoliberal, desregulado y arbitrario; de otro, al amparo de quienes, asumidos como iguales a otros, apuestan por su integración social, sin conseguirla, esquema que deriva en el supuesto de que esta imposibilidad no puede ser, sino, una cuestión racial.

Las vertientes más radicales del katarismo, las indianistas, surgieron de esas cenizas. Pero lo hicieron para disputar el pedigrí étnico de la nación, reinventando el milenarismo conflicto entre blancos e indios, reapropiado por la etnohistoria contemporánea. Por lo tanto, negando el soporte de la precaria unidad cultural de los bolivianos, que es la condición mestiza.

Hechas esas consideraciones, vale la pena detenerse en un nuevo recuento sociológico. El ascenso social en el campo implica haber accedido a medios de reproducción más allá del trabajo agrícola. Implica, pues, una serie de elecciones que se hacen racionalmente. Por eso se envía a los niños a la escuela, porque se dispone de recursos excedentarios para catapultarlos a otras esferas del trabajo, o para que a través de su diversificación ayuden a paliar la pobreza familiar. El bachillerato es señal de haber dado pasos en esa dirección que inevitablemente conduce al mestizaje. En los mejores casos, cuando el excedente puede ser sostenido, el paso siguiente es la profesionalización universitaria. En su curso, nuevamente se ponen en acción las opciones de los sujetos, atadas, sin embargo, a los recursos existentes en el entorno, cantera que usualmente no tiene horizontes productivos y que se complementa con un sistema educativo, en todos sus niveles, históricamente precarizado y sin capacidad para fomentar las iniciativas creadoras de la población.

Ese conjunto de cuestiones han puesto en escena relaciones sociales atemperadas tanto por la desigualdad social, como por la escasez de recursos materiales e inmateriales en la que se debate la población boliviana. De ahí que las disputas entre los grupos sociales tomen formas cruentas, derivando en la naturalización del oponente, que es un modo de deslegitimar su condición ciudadana y convertirlo en un sujeto ausente de derechos.

El nacionalismo étnico es producto de todo ello. Políticamente, proclama la legitimidad de la pureza racial. Sociológicamente, a individuos que se han mestizado pero que, al mismo tiempo, son objeto de la discriminación estructural. Representa, pues, a grupos ascendentes que no encuentran cabida en la sociedad dominante, pero a la que pueden interpelar en base al “credo alfabetizado”, es decir, formando parte crecientemente del sistema de expertos, donde se generan los argumentos ideológicos para disputar el poder (Gellner, 1989: 102; Giddens, 1994). Las ciencias sociales en Bolivia, reinterpretes de los postulados de la diversidad, se nutrieron de esta presencia y, del mismo modo, al calor de las cualidades estructurantes del pensamiento sobre la realidad, calaron, a su vez, en el sentido común de la sociedad. Es probable que esa confluencia de factores haya influenciado para que, a principios del siglo XXI, los bolivianos se asumieran mayoritariamente como indígenas, haciéndose eco de la invariabilidad de la condición étnica, más allá de lo rural y lo urbano y de las condiciones de clase que se obnubilan detrás de ello.

Ante ello, el otro argumento para llenar los contenedores del nacionalismo fue numérico, quedando por adelante encontrar la representación política de aquella nueva mayoría. En la nueva correlación de fuerzas que trajo este siglo, Evo Morales fue su referente histórico, al ser llevado al poder como símbolo de la luchas anti-neoliberales, con todos los créditos del “Primer Presidente Indígena” de Bolivia y, por ende, representante de la alteridad al capitalismo y a la sociedad occidental que la izquierda a nivel mundial se encargó de promocionar.

MINORÍAS INDÍGENAS Y VALORES COLECTIVOS HOY

La sociedad boliviana está edificada sobre estructuras fragmentarias que eventualmente concurren en una misma dirección. Esta concurrencia se produce cuando la política adquiere un dinamismo unificador y pone en tela de juicio el orden existente, para admitir luego un nuevo reflujó societal. Eso quiere decir que aquí no existen fuerzas materiales para sostener la unidad de la nación y que en sustitución de ellas es la política la que actúa. Sin embargo de ello, algo ha variado en el país. Las fuerzas mercantiles desatadas por el Estado de 1952, encarnadas en la proto-burguesía kolla, han tendido a nacionalizarse, es decir, a ocupar el territorio boliviano, imponiendo un nuevo escenario para el mestizaje o la bolivianidad que ya no es solo resultado de la imbricación rural-urbana, sino interregional. Para que esto suceda fue necesaria la fractura de las comunidades andino-occidentales, derivada del ascenso de los grupos sociales con mayor capacidad adaptativa a las condiciones del intercambio campo-ciudad, pero también del éxodo masivo que trajo la parcelación de la tierra y su sucesiva descapitalización entre los más pobres.

La nacionalización del mercado a través del flujo de grandes y pequeños comerciantes kollas es resultado de consideraciones eminentemente pragmáticas. Se va en busca de factores de acumulación que admitan reproducirse en el mercado. Una buena parte de esa expansión se ha dirigido hacia el oriente de Bolivia, espacio en el que se ha producido, en otra escala, un cambio en las correlaciones de fuerza que ya no son obsecuentes con la hegemonía de la burguesía agroindustrial, creada y solventada por el Estado de 1952 y que, a su vez, sostuvo al neoliberalismo. En cambio, tienden a favorecer la acción política del gobierno de Evo Morales legitimado por el carácter democratizador del ascenso indígena, en un contexto en el que prevalecían, unas más explícitas que otras, formas de segregación racistas que a los ojos de la sociedad se volvieron inadmisibles. De la mano de la proto-burguesía kolla, el MAS llevó al oriente el flujo de la igualdad del mercado.

Ahora bien, las fuerzas económicas se desatan implacablemente mientras no exista una acción política que detenga su capacidad corrosiva sobre las relaciones sociales. Pero para que exista esa acción política es necesario que exista un Estado y que su autoridad sea reconocida. Por otra parte, que ese Estado haya convenido ejercerla, en aras del bien común que dice representar. Los nacionalismos suelen aplicar esa fórmula en contextos en los que se producen consensos anti-imperialistas, estatizando fuentes de ingreso estratégicas para los países, basadas en la explotación de recursos naturales. Tras ello, un dilema se cierne sobre los mismos: renovar el aparato productivo sin recursos humanos ni materiales, forma precarizada del capitalismo en sociedades pobres. Ante las premuras que esto trae, el poder privado internacional se recompone, situándose como garante del bienestar colectivo. Ese fue el contexto en el que la revolución de 1952 inició su reflujo anti-obrero e impuso su práctica disciplinaria sobre los mineros en Bolivia.

Similares disyuntivas atraviesa el actual gobierno boliviano. Entre otros aspectos, su peculiaridad se apoya en la variación discursiva de Evo Morales, primero reconociéndose como el “Primer Presidente Indígena de Bolivia”, nominación, dice, le atribuyeron intelectuales y analistas y, luego, como el “Primer Presidente Sindicalista de Bolivia” que él prefiere adoptar. Veamos lo que ello significa y el contexto en el que se lo plantea.

El avance de las fuerzas mercantiles sobre el oriente también tiene el objetivo de la ampliación de la frontera agrícola y marca el horizonte complejo del proyecto nacionalista en Bolivia y su inevitable apelación al autoritarismo. Su orientación apunta al mundo campesino indígena de tierras bajas que ocupa el espacio amazónico, ajeno a los procesos de 1952 e invisible a los propósitos de la pequeña propiedad de ese entonces, pero cuyos derechos fueron reconocidos cuando la justicia cultural o de la di-

ferencia adquirió un status universal, a fines del siglo XX. Amparados por ello, estos pueblos, compuesto por pequeñas poblaciones, se convirtieron en propietarios legales de sus territorios que, además, son de gestión colectiva. El problema es que están situados en medio de fuentes petroleras, gasíferas y mineras, a las que el Estado puede acceder sólo en base a acuerdos con las comunidades que habitan el entorno. Por esa vía, la agenda económica nacionalista, que se sustenta históricamente en la economía extractiva, se ha encontrado con un conflicto. El dilema está en el contenedor ideológico del nacionalismo, que sopesa el valor que tiene lo particular (las identidades sub-nacionales, como las indígenas) respecto a lo general (la identidad nacional). La transición discursiva de Evo Morales está enfocada en avanzar sobre esta última, apostando por la contundencia numérica de los pequeños propietarios campesinos, respecto a la minoría poblacional que representan los indígenas del oriente. La pregunta que su gobierno se hace es: ¿por qué tan pocos indígenas deben poseer territorios tan amplios como los que se legalizaron a favor de ellos ?

Pero hay más. El otro campo de conflicto es de escala cotidiana pero no por eso menos cruenta. Confronta a los pueblos indígenas de tierras bajas con grupos de campesino-indígenas que, sedientos de tierra, provienen del occidente andino y de los avatares de la presión demográfica post-Reforma Agraria. Pero también son resultado de la expansión de la economía del narcotráfico que desde los años 80 tiene a Bolivia como a uno de sus principales proveedores de materia prima, la coca, cuyos cultivos buscan extenderse sobre tierras bajas. No es casual que, dado el auge de esta economía, haya incorporado en sus filas a contingentes de trabajadores rurales y urbanos, afectados por la crisis estructural del Estado del 1952. Tampoco, que haya sido en su seno que surgió uno de los consensos politizadores más importantes de su historia antiimperialista, al punto de llevar a su máximo dirigente, Evo Morales, al poder del Estado, el año 2006.

Las cartas están echadas. Por un lado, Bolivia tiende a unificarse por vía de la nacionalización de la cultura kolla y, por lo tanto, de la recreación inevitable de su mestizaje bajo la hegemonía económica de aymaras y quechuas. En esas circunstancias, la dirigencia campesino-indígena de la zona andina occidental no ha escatimado esfuerzos en inferiorizar culturalmente a los grupos de tierras bajas y, por lo tanto, en la necesidad de “civilizarlos”, a imagen y semejanza de las nuevas mayorías mestizas y de los proyectos de integración nacional que responden a la ideología del progreso, motivo por el cual el gobierno intenta legitimar la necesidad de construir una carretera que, además de todo, atravesará el núcleo territorial que habitan los indígenas del oriente.⁶

⁶ Nos referimos al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Por otro lado, el Estado sigue siendo un instrumento de organización colectiva débil y sin autoridad. Es decir, incapaz de representar los intereses generales. En el caso que nos ocupa, es resultado de las fuerzas corporativas que desatará el Estado de 1952 y de los anhelos de éstas para beneficiarse del poder político, que es el único modo de distribuir derechos ciudadanos que el país ha puesto en práctica.

Siendo esto así, se entiende que detrás de la transición discursiva del presidente, que se dirigió a relieves su identidad sindicalista, está el supuesto de que gobierna el país como representante de los intereses corporativos de los productores de coca. Por eso el avance territorial de estos sobre los pueblos indígenas del oriente tiene, hoy por hoy, el apoyo estatal, lo que no quiere decir que vaya de la mano del bien común.

Y ese es, justamente, el dilema mayor de sociedades como la boliviana. Su comunión es más política que económica y por eso zozobra permanentemente en el conflicto y la discontinuidad histórica. Sin embargo, en lo que toca al presente, a ello se incorpora un dato adicional. Los pueblos indígenas del oriente han sido contruidos en el imaginario colectivo como un referente de la preservación de la vida natural. En un escenario en el que ésta se ha convertido en un bien universal, invocarla alienta la comunión de intereses de toda la colectividad. Es, pues, un referente politizador, un factor sobre el que puede edificarse el consenso contra el régimen actual, aunque todavía de alcance muy precario.

Como en su momento ocurriera con los trabajadores mineros, los pueblos indígenas están apostando por su autonomía política en pos de liderar aquel consenso, recreando el horizonte entre lo particular y lo universal en Bolivia. Como entonces, la agenda nacionalista se prepara para arremeter contra su diferencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Antezana, Luis H. 1983 "Sistema y procesos ideológicos en Bolivia (1935-1979)" en: Zavaleta, René (comp.) *Bolivia, hoy* (México D.F: Siglo XXI).
- Barragán, Rossana 1992 "Entre polleras, lliqllas y ñañacas. Los mestizos y la emergencia de la Tercera República" en Arze, Barragán, Escobari y Medinaceli (comps.), *Etnicidad, economía y simbolismo en los Andes*. II Congreso Internacional de Etnohistoria. Coroico. (La Paz: HISBOL/IFEASB/ASUR).
- Dandler, Jorge 1969 *El Sindicalismo Campesino en Bolivia*. Instituto Indigenista Interamericano (México: Serie Antropología Social, 11).
- Dunkerley, James 1987 *Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982* (La Paz: Editorial Quipos).

- Fleury, Sonia 1997 *Estado sin Ciudadanos* (Buenos Aires: Lugar Editorial).
- Gellner, Ernest 1989 *Naciones y nacionalismo* (México DF: Alianza y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes)
- Giddens, Anthony 1994 *Consecuencias de la modernidad* (Madrid: Alianza Universidad).
- Hobsbawm, Eric 2000 "Etnicidad y nacionalismo en Europa hoy". En: Fernández Bravo, Álvaro (comp.). *La invención de la Nación, lecturas de la identidad, de Herder a Homi Baba* (Buenos Aires: Ediciones Manantial).
- Larson, Brooke 1982 *Explotación agraria y resistencia campesina en Cochabamba*. (Cochabamba: CERES).
- Malloy, James 1989 *La revolución inconclusa* (La Paz: CERES).
- Rude, George 1981 *Revolución popular y conciencia de clase* (Barcelona: Editorial Crítica, Grupo Editorial Grijalbo).
- Salazar, Cecilia 2009 "¿Ethos barroco o herencia clásica? En torno a la tesis americanista de Boaventura de Sousa Santos". En: Tapia, Luis (coord.). *Pluralismo epistemológico* (La Paz: CIDES-UMSA, Colección 25 Aniversario).
- Soto, César, 1994 *Historia del Pacto Militar-Campesino*. Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de CLACSO. Disponible en: <http://www.clacso.org>.
- Torres Rivas, Edelberto 1997 "La nación: problemas teóricos e históricos". En: Lechner, Norbert (ed.). *Estado y Política en América Latina* (México: Siglo XXI Editores).
- Wieviorka, Michel 2003 *El racismo, una introducción* (La Paz: Plural).
- Zavaleta, René 1990 "Notas sobre la cuestión nacional en América Latina". En: *El Estado en América Latina* (Cochabamba: Amigos del libro).
- 1988 *Clases sociales y Conocimiento* (La Paz: Amigos del libro).